

Chapter Title: NICARAGUA: DE LA REVOLUCIÓN ESTATISTA A LA PROFUNDIZACIÓN AGROEXPORTADORA

Chapter Author(s): Eduardo Baumeister and Salvador Martí i Puig

Book Title: La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina

Book Subtitle: campesinos, agronegocio y neodesarrollismo

Book Author(s): Cristóbal Kay, Leandro Vergara-Camus, Carmen Diana Deere, Arturo Ezquerro-Cañete, Ramón Fogel, Thomas F. Purcell, Pablo Lapegna, Jeffery R. Webber, Patrick Clark, Diego Piñeiro, Joaquín Cardeillac, Eduardo Baumeister, Salvador Martí i Puig, Sérgio Sauer and George Mészáros

Book Editor(s): Cristóbal Kay, Leandro Vergara-Camus

Published by: CLACSO. (2018)

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96g0z.12>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://www.jstor.org/terms>. This book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



CLACSO is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en América Latina*

NICARAGUA: DE LA REVOLUCIÓN ESTADISTA A LA PROFUNDIZACIÓN AGROEXPORTADORA¹

Eduardo Baumeister y Salvador Martí i Puig

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo señala que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ha cambiado sustancialmente el modelo agrario existente tras su vuelta al poder en 2007, y que ha mantenido el modelo neoliberal que se desplegó en el período posrevolucionario (1990-2006) incrementado la producción destinada a la exportación, aunque con la ampliación de las políticas sociales y algunos apoyos para pequeños productores. En este sentido el sandinismo del siglo XXI no ha recuperado el proyecto de reforma agraria que impulsó durante la revolución (1979-1990) si no que se ha adaptado al contexto neoliberal global. Con esta lógica el Presidente Ortega aprovechó su alianza con el gobierno venezolano para incrementar la producción a través de aumentar las exportaciones agropecuarias, beneficiando así a sectores empresariales (algunos tradicionales y otros cercanos al gobierno) y estableciendo políticas de apoyo para el campesinado. Sin embargo a partir de 2016, con la disminución de la asistencia petrolera de Venezuela y el declive de exportaciones hacia dicho país,

¹ Agradecemos a los dictaminadores anónimos que nos dieron pautas para mejorar el texto a lo largo del proceso de elaboración, a la vez que estamos en deuda con Crisóbal Kay y Leandro Vergara-Camus por su atento y minucioso trabajo de edición.

el gobierno de Nicaragua se enfrenta a un nuevo escenario lleno de retos y con menos recursos de los que ha dispuesto a lo largo de la última década.

CARACTERÍSTICAS DEL AGRO NICARAGÜENSE Y LA REFORMA AGRARIA SANDINISTA

EL AGRO ANTES DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

El agro nicaragüense se ha caracterizado históricamente por tener una estructura y una producción diferente a la de sus países vecinos, donde las plantaciones bananeras y las grandes haciendas cafetaleras fueron la norma. En Nicaragua a pesar de tener una economía eminentemente rural, tuvo un formato diferente debido a la baja densidad de población, a la existencia de una amplia frontera agrícola a través de la cual los colonos fueron paulatinamente avanzando, ya que el sueño histórico de su elite fue la inserción en el mercado internacional mediante la construcción de un Canal Interoceánico. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de los gobiernos de los Somoza, el agro se modernizó (con una fuerte expansión algodonera, ganadera y azucarera) y con la Revolución Sandinista (1979-1990) se intentó profundizar esa modernización a partir de la creación de empresas estatales, si bien este impulso se detuvo en la segunda mitad de los años ochenta debido a la guerra.

En las décadas previas al triunfo revolucionario en Nicaragua coexistían varios tipos de estructuras agrarias, donde no había una presencia dominante ni de grandes plantaciones, ni de grandes haciendas, ni de fuertes economías campesinas indígenas, como se observaba fundamentalmente en la parte norte de América Central. Había muchos estratos de medianos productores en el Norte del país y la presencia del dualismo latifundio/minifundio era más marcada en los departamentos del Pacífico, de más antiguo poblamiento. A mediados de los años setenta del siglo pasado las fincas grandes, que tenían una extensión superior a las 350 hectáreas, sumaban en el Pacífico alrededor del 40 por ciento del valor bruto de la producción agropecuaria de esa región, mientras que en las regiones del interior y en el Atlántico este estrato controlaba el 20 por ciento de la producción total de la época (Baumeister, 1998: 111).

En las décadas previas a la revolución hubo un proceso de expansión del capitalismo agroexportador que se tradujo en términos sociales en una amplia incorporación de fuerza de trabajo asalariada estacional, particularmente en los cultivos de algodón, café, caña de azúcar, y en la ganadería vacuna. Se ha estimado que en el momento de máxima demanda de mano de obra en los principales cultivos se lograba movilizar a un equivalente cercano al 80 por ciento de la población activa agrícola (Baumeister, 1998: 127; Núñez, 1980).

Los campesinos pobres, por otro lado, tenían diversas vías de inserción laboral según zonas. En el Centro y Norte muchos campesinos trabajaban en unidades familiares con siembras de granos (maíz y frijol) en pequeña escala y estacionalmente participaban como asalariados en los cortes de café; aunque también existía un sector de trabajadores asalariados permanentes en fincas ganaderas y cafetaleras. En el Pacífico, por la fuerte expansión del algodón y la caña de azúcar se constituyó un sector de mano de obra más proletarizada, que trabajaba en las actividades permanentes y fundamentalmente estacionales.

Una encuesta levantada entre diciembre de 1980 y febrero 1981, en el inicio del proceso de reforma agraria sandinista, mostraba que casi el 40 por ciento de los trabajadores del algodón y la caña de azúcar eran analfabetos; que tenían de media 7 miembros por hogar; que solo el 35 por ciento tenían algún acceso independiente a la tierra, o sea que había un sector fuertemente asalariado, sobre la base de trabajos temporales, que abarcaban cinco meses del año². Esta situación da cuenta de que en Nicaragua antes de 1979 existía una estructura agraria muy compleja, con trabajadores temporales, obreros agrícolas, pequeños y medianos propietarios y una elite propietaria dividida políticamente según su posición al régimen somocista. Otra cuestión era que los estudios previos a 1979 sobrestimaron el peso de los asalariados y latifundios debido a la incapacidad organizativa y la invisibilidad de los otros grupos subalternos (Kaimowitz, 1986; Baumeister, 1989). Estos estudios condicionaron el diseño de la reforma agraria impulsada por la revolución sandinista³ e indujeron a diversos errores.

LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

Cuándo el FSLN llegó al poder quiso transformar, a través de una reforma agraria, el agro nicaragüense a partir de cinco grandes ejes. El primero fue la expropiación de las fincas de la familia Somoza y sus aliados para convertirlas en fincas estatales y en cooperativas de corte colectivo. El segundo fue profundizar la modernización de las unidades productivas estatales y cooperativas de producción intensificando el uso de químicos, maquinaria y riego a través de grandes proyectos de transformación agroindustrial. El tercero fue masificar el acceso al financiamiento a través de la ampliación de la banca estatal de de-

2 Basado en CIERA (1981) y Baumeister y Havens (1982).

3 La revolución Sandinista dio inicio en 1979, después de una guerra insurreccional contra un régimen autoritario y patrimonial. Para mayor información véase Martí i Puig (2013b). Sobre el perfil de los sectores que lideraron la insurrección véase Vilas (1984).

sarrollo. El cuarto fue controlar el comercio interior a través mecanismos de acopio, compra y distribución estatal, y también el control estatal directo de las exportaciones e importaciones. Y el quinto y último fue organizar a los trabajadores y los pequeños productores en cooperativas y organizaciones gremiales vinculadas al régimen revolucionario. Cabe considerar que el sector privado no afectado por las confiscaciones tuvo un acceso amplio al crédito estatal y a la compra de insumos y maquinarias a precios muy subsidiados.

El gobierno revolucionario otorgó al proyecto de reforma agraria una gran importancia. Se creó un potente Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) que se expandió rápidamente creando delegaciones en el territorio, siempre vinculadas al FSLN.

A nivel de la estructura de propiedad el primer objetivo del gobierno fue la creación de un amplio sector estatal, que se llamó Área de Propiedad del Pueblo, APP (Kaimowitz, 1986: 140; Serra, 1990: 79). Esta tendencia se incrementó en 1981 cuándo se aprobó la Ley de Reforma Agraria que permitía “la afectación del latifundio ocioso, deficientemente explotado o arrendado”. Entre 1981 y 1984 se expropiaron numerosos latifundios siendo los principales beneficiarios las empresas estatales y las cooperativas de trabajadores llamadas Cooperativas Agrarias Sandinistas, CAS (Cardenal, 1987). Tal como se observa en el Cuadro N° 1 la estructura de propiedad de Nicaragua cambió profundamente entre 1978 (último año del régimen somocista) y los primeros años de la revolución, disminuyendo el peso relativo de las propiedades mayores a 140 hectáreas que pasaron de poseer el 52 por ciento de la tierra al 26 por ciento, y generándose la aparición de la propiedad estatal (que llegó a representar el 19 por ciento) y cooperativa (con el 19 por ciento de la tierra entre las cooperativas de crédito y servicios y las de tierra) (Baumeister, 1998: 188). En esta lógica, en la primera mitad de la década de los años ochenta la distribución de la tierra cambió completamente, tal como se describe el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1

Evolución de la estructura de propiedad de la tierra por sector, 1978-1984 (en porcentajes)

Estratos en hectáreas y CCS, CAS y APP	1978	1984
Más de 350	36	13
140 a 350	16	13
140 a 35	30	30
35 a 7	16	7
Menos de 7	2	1
Cooperativas de Créditos y Servicios, CCS*	—	10
Cooperativa Agrarias Sandinistas, CAS**	—	7
Estatad (APP)	—	19
Total	100	100

Notas:

* CCS: Cooperativas de Crédito y Servicios, integradas por productores individuales, algunos beneficiarios de reforma agraria y otros poseedores tradicionales con crédito estatal;

** CAS Cooperativas Agrícolas Sandinistas (con tenencia colectiva de la tierra)

Aclaración: La disminución del área del estrato de menos de 7 hectáreas y del comprendido entre 7 y 35 hectáreas se explica porque un segmento de productores tradicionales con tierra propia se incorporaron a las Cooperativas de Crédito y Servicios.

Fuente: Dirección General del Reforma Agraria en Wheelock (1986: 119).

En la segunda mitad de la década de los ochenta con la agudización de la guerra de la Contra⁴, que se desarrolló en las zonas rurales del interior y en la región Atlántica, se impulsarían desplazamientos de población dentro de las zonas de guerra y se aprobaría una nueva Ley de Reforma Agraria (en 1986) dando mayor peso a factores políticos. Sin embargo, el área neta nueva confiscada por la reforma agraria no se incrementó de manera sustancial debido a la guerra y a las dificultades crecientes de la economía del país.

En cuanto a la inversión, durante la primera mitad de la década, el gobierno revolucionario fue muy activo: otorgó al sector agropecuario el 40 por ciento de la inversión global. Sin embargo esta inversión priorizó la modernización productiva frente al consumo (Kleiterp, 1988). El esfuerzo inversor se concentró en el sector estatal, que absorbió el 70 por ciento de los recursos, frente al 25 por ciento y 5 por

4 La Contra fue un ejército “contrarrevolucionario” irregular que se creó en 1980 a partir de un sector de la antigua Guardia Nacional y de grupos disidentes del sandinismo, y que fue financiado por la Administración norteamericana. A lo largo de la década de los ochenta la Contra reclutó a muchos campesinos de la zona interior del país. En 1990, después de la derrota electoral del FSLN, la Contra se desmovilizó (Martí i Puig, 2001).

ciento del sector cooperativo y del privado respectivamente (Serra, 1990: 84; Utting, 1988: 13).

La estrategia del gobierno revolucionario fue priorizar la mecanización, los químicos y el riego; hecho que supuso una inversión en importaciones de bienes de capital e insumos sin parangón en Centroamérica y significó el paso de 2.850 tractores y un área de 63.882 hectáreas de riego en 1978 a 5.484 tractores y 96.025 hectáreas de riego en 1987 (Baumeister, 1991). Los mayores beneficiarios de esta política fueron las empresas del Estado (MIDINRA, 1987: 211). A pesar de ello, el incremento de la productividad fue menor de la esperada debido a la guerra, al uso irracional de los insumos y bienes de capital, y por los altos costos de producción e ineficiencia en las empresas estatales.

En cuanto a la política de crédito, una vez nacionalizada la banca, se conformó un Sistema Financiero Nacional que impulsó una política crediticia muy activa. El financiamiento bancario amplió su cobertura de un tercio de la superficie agrícola en 1979 a dos tercios en 1988. El sector estatal y los grandes y medianos productores fueron los más beneficiados, si bien los campesinos y las cooperativas accedieron a niveles muy superiores a los alcanzados en décadas previas (Serra, 1990: 143). El crédito constituyó un importante mecanismo de control del gobierno sobre el sector cooperativo, integrándolo en los planes y metas productivas diseñadas por la administración estatal.

Respecto a la política de comercialización, el gobierno nacionalizó el comercio exterior y ejerció un estricto control del comercio interno con el fin de garantizar al consumidor precios bajos y el abastecimiento de productos. Las autoridades encargadas del Ministerio de Comercio Interior fijaron precios de compra al productor y precios de venta al consumidor, subsidiando los alimentos distribuidos con tarjetas de racionamiento (Biondi-Morra, 1990). Así las empresas del Estado realizaron el acopio y la distribución de productos de consumo básico a partir de una red nacional de bodegas y puestos de venta. Esta red deterioró el comercio privado tradicional que existía en el campo y estableció la obligación de vender los productos al Estado y se prohibió el traslado de alimentos fuera de una misma región. Estas medidas generaron el rechazo de la mayoría del campesinado, implicando la rápida caída de la producción y el desarrollo de un mercado negro con precios muy superiores a los oficiales (Dore, 1990: 109).

En la segunda mitad de los años ochenta, cuando las dificultades económicas y políticas aumentaron (junto con el incremento de la guerra contrarrevolucionaria), uno de los peores problemas de la revolución fue mantener la producción agropecuaria que cayó

significativamente en todos los rubros menos en la producción de granos básicos⁵.

Finalmente es necesario señalar la transformación de la organización social de la producción con la creación de cooperativas y empresas del Estado, y la creación de dos organizaciones gremiales vinculadas al FSLN: la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG). La ATC encuadró a los asalariados de las empresas estatales y de las empresas privadas más grandes y centró su actuación en el cumplimiento de los planes estatales y el apoyo a la movilización para los frentes de guerra. La UNAG, por otra parte, organizó a los pequeños y medianos propietarios agrícolas y mantuvo una mayor autonomía respecto al FSLN.

Como conclusión se puede afirmar que la reforma agraria sandinista tuvo muchos problemas debido a la guerra, al embargo comercial norteamericano y al deterioro de los términos de intercambio. Pero también debido a errores políticos y de gestión, destacando las persistentes pérdidas que generaban las empresas del Estado, la subutilización de sus plantas y equipos, y a la poca atención prestada a los reclamos de los campesinos cuyo objetivo era la obtención de lotes de tierra y recursos de forma individual. ¿A qué atribuir estos errores? Según Baumeister (1998; 2009) estos obedecieron, por un lado, al sesgo tecnocrático y desarrollista de la reforma agraria y, por otro lado, a la sobre-politización de las dinámicas productivas⁶. Sin embargo, a pesar de todos los problemas, es necesario señalar que la reforma agraria sandinista fue el proyecto más ambicioso de la historia de Nicaragua para modernizar el agro y mejorar las condiciones de los trabajadores del campo.

RECONFIGURACIÓN AGRARIA Y NEOLIBERALISMO: IMPULSO Y CONTINUIDAD A PESAR DEL RETORNO DEL SANDINISMO (1990-2016)

La transformación agraria de sesgo estatista llevada a cabo durante la década de los ochenta finalizó con la derrota electoral del FSLN, en febrero de 1990. A partir de entonces desde el nuevo gobierno se impulsó la privatización de la tierra y las cooperativas de tipo CAS parcelaron la tierra por iniciativa de sus propios socios. También se

5 La producción de maíz, típico producto campesino, fue en la segunda mitad de los años ochenta, en pleno conflicto armado interno, bastante superior al alcanzado entre 1981-1984; por el contrario, el conjunto del agro tuvo un desempeño menor en ese mismo período; cálculos propios basados en datos de FAOSTAT.

6 El peso del paradigma cubano fue muy fuerte, ya que a inicios de los ochenta Cuba tenía unos altos niveles de producción por unidad de superficie o por animal.

impulsaron políticas comerciales y de crédito de corte neoliberal, y se enfrentó a las organizaciones gremiales⁷. Estas políticas fueron una opción deliberada de las tres administraciones liberal-conservadoras que gobernaron en Nicaragua desde 1990 hasta 2006⁸, pero con la llegada de Daniel Ortega a la Presidencia de la República en 2007 las políticas macroeconómicas se mantuvieron en lo fundamental. Precisamente por ello en este apartado analizaremos la transformación de la estructura de la propiedad, la dinámica productiva y la organización gremial incluyendo en el mismo período tanto gobiernos de derecha (1990-2006) como de izquierda (2007-2015), si bien en el epígrafe siguiente se señalarán de forma específica las medidas impulsadas desde la administración Sandinista.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Con la pérdida del poder del FSLN y el fin del proceso revolucionario, una de las cuestiones fundamentales del nuevo gobierno fue la cuestión de la propiedad. Con la derrota electoral de los sandinistas, muchos de los antiguos propietarios percibieron la posibilidad de obtener nuevamente sus tierras, a la vez que los beneficiarios de la reforma agraria mantuvieron la determinación de quedarse en las tierras que trabajaron por una década. Para complicar esta situación el gobierno entrante prometió tierra a los antiguos combatientes de ambos frentes —Sandinistas y Contras— creando nuevas expectativas (Envío, 1992).

Según diversos cálculos, en 1990, buena parte de las tierras afectadas por la reforma agraria empezaron un proceso de litigio. Dicho conflicto enfrentó a segmentos de todos los estratos sociales y políticos: gente de bajos recursos contra terratenientes; luchas entre sectores pobres de diferentes posicionamientos políticos; y élites tradicionales contra la *alta dirigencia* sandinista nacida al calor de la revolución. A nivel internacional, la administración de los Estados Unidos, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) se implicaron en el tema de la propiedad de la tierra en Nicaragua.

Después de la derrota electoral sandinista en febrero de 1990 se comenzó a diseñar, entre los funcionarios del gobierno saliente y del entrante, el destino de la tierra del área reformada. Hubo consenso

7 La excepción fue el acuerdo entre el ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, y la dirigencia de la UNAG, que aceptó dar nuevo un rol más comercial y productivo a la organización. Sin embargo, en la segunda mitad de los años noventa esa presencia económica de UNAG se había reducido de manera marcada.

8 En dicho período los Presidentes de la República fueron: Violeta Barrios de Chamorro entre 1990 y 1996; Arnoldo Alemán entre 1997 y 2001, y Enrique Bolaños entre 2001 y 2006.

en que las tierras recibidas por las cooperativas, bajo la modalidad CAS (Cooperativas Agrícolas Sandinistas, con tenencia colectiva) y las CCS (Cooperativas de Crédito y Servicios, con tenencia individual de la tierra) pasaran a manos de los cooperativistas; sin embargo, en zonas más alejadas, con fuerte presencia de desmovilizados de la Contra muchas tierras de cooperativas se ocuparon (Equipo Envío, 1992).

Por otro lado, las áreas estatales, que contenían las mejores tierras y con mayor infraestructura se destinaron hacia cuatro sectores. Una parte fueron devueltos a los antiguos propietarios indebidamente confiscados; otra parte se destinó a los trabajadores y técnicos de las empresas anteriormente estatales; otra parte a los desmovilizados de la Contra y otra parte para desmovilizados del Ejército. Como ejemplo de este proceso, en el Cuadro N° 2 puede verse la distribución de las tierras que correspondieron a zonas algodoneras (AGROEXCO), actividades ganaderas (HATONIC), y CAFENIC (dedicadas al cultivo del café).

Cuadro N° 2
Distribución de las tres principales corporaciones estatales de reforma agraria (en porcentajes), 1991

	AGROEXCO	HATONIC	CAFENIC	TOTAL
Devoluciones del sector privado	48,6	26,0	35,1	29,6
Desmovilizados del ejército	12,7	19,1	13,4	17,5
Desmovilizados de la resistencia	6,6	22,8	19,0	20,7
Trabajadores	32,2	32,1	32,6	32,2
Total	100	100	100	100

Fuente: Tomado de Envío (1992, Cuadro N° 3)

Lo reportado en el Cuadro N° 2 es solo un segmento del área estatal, que era mucho más extensa, con cerca de 948.000 manzanas (664.000 hectáreas) en 1988; de modo que hay que agregar las áreas correspondientes a los ingenios azucareros estatales, las fincas arroceras y también las áreas apropiadas por la *piñata*⁹ por la alta dirigencia política y

⁹ La *piñata* es el término con el que se refiere a la privatización de tierras en manos de antiguos cuadros sandinistas en el momento en que el FSLN perdió las elecciones de 1990. Literalmente una *piñata* es un juego que se realiza en celebraciones con niños y que se basa en colgar de una cuerda un recipiente (de cartón o barro que contiene dulces) para ser rota con un palo y liberar su contenido sobre

militar; así como un segmento estimado cercano a las 277.000 manzanas (194.000 hectáreas) que se encontraban abandonadas por el conflicto armado en zonas fronterizas y en zonas de frontera agrícola que se habían convertido en áreas de matorrales y de bosque secundario, sin animales ni cultivos (Equipo Envío, 1992).

Este proceso fue muy complejo y confuso porque muchas de las tierras afectadas por la reforma agraria estaban en manos de las empresas estatales pero no se habían completado todos los trámites legales de traspaso de las propiedades, muchas de las cuales seguían a nombre de los antiguos propietarios; por otro lado, muchos de los reclamantes tampoco tenían títulos perfectos sobre sus fincas, con mediciones muy antiguas y ambiguas, basadas en cursos de ríos, fincas vecinas, cerros, etcétera¹⁰. Todo esto determinó que las relaciones coyunturales de fuerza en el plano político y familiar, fueran determinantes en la posesión final y efectiva de las fincas. Esto explica la rapidez en que se terminó el sector de propiedad estatal que se repartió básicamente sobre cinco segmentos: antiguos propietarios a los que se les devolvió la tierra y recibieron adicionalmente indemnizaciones; trabajadores y técnicos de las antiguas fincas estatales; desmovilizados de la Contra; desmovilizados del Ejército, fundamentalmente oficiales; y alta dirigencia política del FSLN.

El conflicto de la propiedad en el campo se “solucionó” a partir de múltiples negociaciones, presiones y transacciones, ya que ningún actor pudo imponer su voluntad sobre el resto. Sin embargo hubo claros ganadores y perdedores relativos (Close, 1999). Entre los ganadores cabe señalar a alguno de los antiguos propietarios, sobre todo los nicaragüenses nacionalizados norteamericanos por razones políticas durante la década de los ochenta. También entre los ganadores destacaron un heterogéneo grupo de colectivos vinculados al FSLN fruto del pacto (llamado Proceso de Transición del Poder Ejecutivo) elaborado entre febrero y abril de 1990 entre el gobierno saliente y entrante, con el que se traspasaron tierras afectadas por la reforma agraria a campesinos, cooperativistas, miembros de sindicatos y del ejército, así como a jefes del FSLN que se convirtieron —de la noche a la mañana— en una nueva burguesía agraria (Martí i Puig, 2013b).

los participantes. Cuando se rompe todos los participantes se lanzan al suelo para apropiarse de los dulces.

10 Hay que tener en cuenta que las áreas catastradas del territorio nacional en 2015 sumaban solo el 17 por ciento del país, lo cual supone que muchas áreas son estimaciones de los propios propietarios no certificadas plenamente por el Estado. Ver <<http://www.ineter.gob.ni/articulos/areas-tecnicas/Catastro/Catastrofisico/contenido/SituacionActual.html>>.

Sin embargo la redistribución de las tierras estatales de reforma agraria encontró problemas serios para la gestión empresarial en el nuevo contexto de política económica neoliberal. La fuerte reducción del crédito hizo rápidamente inviables a unidades de producción basadas en trabajo asalariado e intensivas en inversión; lo cual obligó a muchas unidades a vender sus tierras, fundamentalmente de los sectores de desmovilizados de los ejércitos, a técnicos del antiguo sector estatal con mucho más vínculos con fuentes de crédito¹¹. Al final la estructura agraria resultante —tal como se observa en la Cuadro N° 3— supuso un nuevo proceso de concentración del propiedad, si bien no fue exactamente una “contrarreforma” (Baumeister y Fernández, 2005), ya que entre 1990, como punto final de la reforma agraria, y 2001, cuando se realizó un Censo Nacional Agropecuario, los sectores que cedieron tierras fueron básicamente las áreas estatales que prácticamente desaparecieron y las formas colectivas de tenencia, que se distribuyeron entre sus antiguos miembros, siendo el segmento de sectores medios (entre 35 y 140 hectáreas, y entre 140 y 350 hectáreas) el que ganó un mayor peso (Baumeister y Fernández, 2005: 182).

Cuadro N° 3

Evolución de la estructura de propiedad de la tierra por estrato, 1978-2011 (en porcentajes)

Estratos Tamaño (ha)	Porcentaje de la tierra en fincas por estratos de tamaño			
	1978	1988	2001	2011
0-7,4	2,1	2,1	4,5	5,6
7,4 a 35,2	15,4	15,1	20,5	19,9
35,2 a 140,8	30,1	28,4	36,8	35,9
140,8 a 352,2	16,2	12,8	18,4	19,4
352,2 y más	36,2	13,5	19,8	19,2
Reforma agraria	0	28,1	0	0
Total	100	100	100	100

Fuentes: Pérez y Fréguin-Gresh (2014), estimaciones de CIERA para 1978 (documentos internos); y estimaciones propias para 1988 basadas en estadísticas de la Dirección General de Reforma Agraria del MIDINRA (documentos mimeografiados).

11 Un ejemplo paradigmático fue el Ingenio Benjamín Zeledón, que había pertenecido en el pasado a la familia Somoza, y que en el momento de la privatización en 1990 pasó a ser propiedad conjunta de trabajadores y antiguos técnicos estatales. Con el tiempo este ingenio pasó a manos de antiguos altos cargos técnicos en el MIDINRA. Finalmente, en 2014 el Ingenio fue vendido a un grupo inversor colombiano. Ver <<http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/334166-colombiana-mayaguez-compra-ingenio-azucarero-casur/>>.

Resumiendo, la transformación de la propiedad rural que se inició en 1980 con expropiaciones estatales al somocismo, continuó en la década de los noventa pero con una lógica basada en la privatización de áreas estatales y de tenencia colectiva, y la ampliación de la frontera agrícola, que había retrocedido con la situación de guerra. Este complejo y rápido cambio de la propiedad agraria supuso un incremento del desempleo y del subempleo rural en las zonas del Pacífico y una reducción del trabajo asalariado¹²; a la vez que en zonas del interior del país hubo un proceso de “recampesinización” a partir del cultivo de tierras que antes fueron escenario de la guerra y de la nueva apertura de la frontera agrícola¹³. A resultados de lo expuesto los datos de la evolución de la distribución de tenencia de la tierra desde 1978 a 2011, como se ve en el Cuadro N° 3, no muestran una profundización del peso del latifundio, si no de las explotaciones medianas, sin que las grandes explotaciones recuperen el peso que tuvieron antes de la Revolución¹⁴.

DESREGULACIÓN DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Además de la transformación de la estructura de la propiedad agraria y la modernización de las fincas medianas y grandes, los gobiernos posteriores a 1990 inauguraron un patrón de políticas de corte neoliberal basado en la práctica desaparición del crédito estatal y de la asistencia técnica pública, así como la cesión a manos privadas de la comercialización interna y externa de insumos, maquinaria y productos agrícolas.

En la década de los noventa los segmentos más tradicionales de la élite y otros grupos económicos, incluyendo capitales extranjeros, ganaron espacios económicos importantes además de introducirse en la agroindustria, y de incorporarse en la minería, turismo, banca, comercio mayorista y minorista, telecomunicaciones, energía y derivados del petróleo (Jonakin, 1997).

A partir de los años noventa el crédito bancario se privatizó en su totalidad. Según el Censo Agropecuario 2001 solo el 14,9 por

12 La reducción del trabajo asalariado fue consecuencia de procesos migratorios hacia Costa Rica. Una estimación basada en el Censo de Población de Nicaragua de 2005 estableció que el 51,2 por ciento de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica provenían de las zonas del Pacífico (sin contar el departamento de Managua). Basado en Baumeister, Fernández, Acuña (2008: 34).

13 Basado en el Censo de Población de 2005 se puede afirmar que el 64 por ciento de los ocupados en el agro fuera de la Región del Pacífico (o sea en la Región Interior y en el Atlántico), lo hacían como trabajadores por cuenta propia o familiares no remunerados.

14 Eso no significa que no se ampliaran algunos estratos claramente dominados por grandes empresas capitalistas, como son las de caña de azúcar y de palma africana.

ciento de las explotaciones agropecuarias accedieron a créditos, un valor muy similar en el Censo 2011, que era de un 14,7 por ciento. Estos datos muestran que la ampliación del crédito agropecuario, una demanda reiterada por Ortega desde la oposición, no logró concretarse cuándo llegó al poder en 2007, a pesar de activar iniciativas como la de un banco estatal llamado “Produzcamos”, de muy limitado alcance¹⁵.

Por otro lado los gobiernos redujeron de forma muy significativa la presencia del gasto público en el sector agropecuario, si bien tuvo un pequeño incremento en los primeros años de la administración Ortega con una cobertura de servicios de asistencia técnica, aunque esta tampoco superó la cobertura del 15 por ciento de los productores.

En cuanto a la producción, desde 1990 se volvieron a impulsar las actividades de agro-exportación de los rubros tradicionales (café, carne de vacuno, azúcar, tabaco, maní) sobre la base de una política de apertura al comercio exterior, incluyendo la obtención de préstamos a los compradores externos. Este comercio se ha concentrado en pocas manos, pues unos pocos grupos nacionales —algunos con vinculación internacional— controlan el procesamiento de la producción de carne a través del control de los mataderos, del azúcar a través de los ingenios, del tabaco a través de las plantas elaboradoras de puros, y del café al controlar los beneficios. También los grupos exportadores son un colectivo muy reducido, unos vinculados al capital nacional y regional tradicional (Spalding, 2016). Con la administración Ortega en 2007 esta lógica se mantuvo, e incluso se aumentó a raíz del incremento de los precios en el mercado internacional, tal como puede verse en el Cuadro N° 4, donde se comprueba un fuerte incremento del volumen físico y del monto de las exportaciones de origen agropecuario desde mediados de los años noventa hasta 2014.

15 Se puede estimar que a fines de octubre de 2015 la cartera de crédito del Banco Produzcamos representaba solo el 1 por ciento de la cartera de crédito del conjunto del Sistema Financiero Nacional, a partir de la información presente en <<http://www.superintendencia.gob.ni/index.php?web=contenido&idd=1&idw=36>> y de cálculos propios.

Cuadro N° 4
Exportaciones: Volumen físico de los principales productos
agropecuarios de exportación (1978=100)

Años	Café	Carne vacuna	Azúcar
1978	100	100	100
1994-1998	79	67	124
2000-2005	128	98	202
2006	160	145	206
2014	205	282	439
2016	217	287	322

Fuente: Exportaciones según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (2015), SIECA (estadísticas de comercio exterior) y cálculos propios.

Además de los cultivos de café, azúcar, maní y frijol, es preciso hacer una mención especial al tema de la ganadería ya que la superficie que los pastos han ido ocupando durante los últimos años ha crecido de forma relevante. En 2001 el Censo Agropecuario estimó un área de pastos de 2,8 millones de hectáreas, y quince años más tarde, en 2015, esta pasó a ser de 4,5 millones de hectáreas¹⁶. Esta dinámica supuso un notable incremento del hato ganadero que en 2001 era de 2,6 millones de cabezas de ganado vacuno y en 2015 pasó a ser de 5,2 millones de cabezas¹⁷. De las cifras más recientes se puede suponer que la carga animal por unidad de superficie de pastos es de 0,81 animales por hectárea de pastos, lo cual refuerza los históricos patrones extensivos¹⁸. Estos datos sobre la expansión ganadera, dan cuenta de un proceso que se ha acelerado desde el 2000, y que se vincula a la estructura de la producción de ganado y de leche cruda basada en pequeñas y medianas unidades de producción¹⁹. Sin embargo, esta dispersión en la producción desaparece en la etapa del procesamiento de carne y leche donde hay una gran concentración. Respecto a la carne solo existen tres mataderos relativamente grandes que controlan una parte

16 Según Censo Agropecuario de 2001 y estimaciones de INETER.

17 Véase: <<http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/372321-bcn-hay-millon-reses-mas-nicaragua/>>.

18 Según Informe Final del Censo Agropecuario 2011 y cálculos propios.

19 En 1970 Nicaragua sumaba el 25 por ciento del hato ganadero de América Central; para 2012 puede estimarse que ese peso se ha ampliado al 37 por ciento, cálculos propios basados en Faostat. Por otro lado es preciso tener en cuenta que Nicaragua representa solo el 9 por ciento de los productores agropecuarios de la región (Baumeister, 2015).

del abastecimiento interno y centralizan prácticamente todas las exportaciones; y en cuanto a la producción industrial de leche existen cuatro empresas que producen la totalidad de la leche pasteurizada, para el mercado interno y las exportaciones. Esto varía un poco para la producción de quesos artesanales y semi-artesanales vinculados al mercado regional centroamericano, ya que existen cerca de 196 establecimientos registrados²⁰.

A raíz de lo expuesto se puede afirmar que el modelo privado de producción y comercialización concentrada iniciado en 1990 continuó con la administración sandinista. Es más, con la llegada del presidente Ortega este modelo se intensificó con el acceso privilegiado al mercado de Venezuela, bajo el paraguas empresarial de ALBANISA²¹, a la par que se ha ido concentrando en pocos grupos el procesamiento y comercialización de los principales productos destinados al mercado nacional e internacional, como son la carne, leche, azúcar o café.

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO AGRARIO

Durante la revolución, las organizaciones gremiales ATC, de trabajadores asalariados rurales, y UNAG, vinculada a pequeños y medianos productores, tuvieron presencia en los debates sobre política agraria, si bien su autonomía respecto al FSLN fue limitada. Posteriormente, a inicios de la década de los noventa, estas organizaciones cobraron alguna autonomía con respecto al FSLN buscando fortalecer proyectos económicos (procesamiento, comercialización de productos agrarios y actividades de crédito), sin embargo esta evolución fue muy limitada.

La ATC, junto con otros movimientos populares rurales y urbanos de adscripción sandinista, impulsaron diversos episodios de conflictividad que se concretaron en huelgas, tomas de tierras, luchas por la propiedad de fincas y empresas urbanas durante la primera mitad de la década de los noventa (Martí i Puig, 1997; Spalding, 2014). Sin embargo estos episodios de conflictividad y lucha empezaron a descender rápidamente. A la vez, las organizaciones gremiales sandinistas perderían protagonismo y poder de movilización al no ser capaces de desarrollar proyectos económicos alternativos viables.

20 Ver <<http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=a0wXg43An8U%3D&tabid=438&language=es-NI>>.

21 ALBANISA es una empresa privada mixta participada por la empresa estatal Petróleos de Nicaragua (PETRONIC), que es propietaria del 49 por ciento, y por Petróleos de Venezuela (PDVSA) propietaria del 51 por ciento restante. ALBANISA fue creada en 2007, con el ingreso de Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Desde su creación ALBANISA ha diversificado sus actividades. Para más información véase: <http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Alba_de_Nicaragua_Sociedad_Anonima>.

Por otro lado, en el mismo período, la UNAG creó un banco, un matadero y amplió plataformas de distribución como ECODEPA (Empresa Cooperativa de Productores Agropecuarios) con el fin de establecer un sector económico de carácter cooperativo para proteger a medianos y pequeños productores. Pero su objetivo de crear un polo productivo alternativo fracasó debido a los problemas de gestión, a la falta de pago de los créditos que otorgaban a sus bases y por las dificultades de obtener crédito de la banca comercial. A mediados de los noventa su Banco y ECODEPA ya no existían.

La dinámica expuesta da cuenta de que a partir de 1990 hubo un proceso de desarticulación de las organizaciones campesinas y de trabajadores del campo que no pudieron sostenerse en un entorno neoliberal en el que se quedaron sin recursos y cuadros. Desde 1990 estas organizaciones dejaron de tener el apoyo que gozaron del Estado y al que estaban acostumbradas. El colapso de estas organizaciones fue debido a la pérdida de apoyo estatal y a la falta de cohesión entre la dirigencia y las bases. Con todo, es preciso señalar que a nivel local y departamental los campesinos y los pequeños productores consiguieron mantenerse organizados para defender sus intereses frente a las instancias gubernamentales. Pero en cualquier caso, los grandes perdedores del agro después de 1990 han sido los trabajadores asalariados y los pequeños productores minifundistas, muchos de los cuales terminaron avanzando sobre la frontera agrícola, migrando hacia las zonas urbanas del país o hacia Costa Rica como mano de obra agrícola.

La proporción de asalariados en la población activa agropecuaria ha ido disminuyendo en las últimas décadas. Mientras que antes de 1979 el peso de los asalariados se acercaba al 45 por ciento de los ocupados en el agro, en la actualidad su peso relativo es menor al 30 por ciento. Por otro lado, el sector que ha incrementado es el de los pequeños productores familiares no remunerados (de subsistencia y autoconsumo), producto del fuerte crecimiento demográfico de las décadas anteriores, y de las posibilidades de acceder a pequeñas parcelas de tierra, tanto por la privatización en pequeños lotes de la reforma agraria como principalmente por ampliación de la frontera agrícola.

¿QUÉ HA HECHO LA ADMINISTRACIÓN ORTEGA? (2007-2017). IMPULSO EXPORTADOR COMBINADO CON POLÍTICAS DE ALIVIO A LA POBREZA

Las promesas realizadas por Daniel Ortega durante la larga campaña electoral de 2006 fueron muy diferentes a las que el mismo dirigente hizo en 1984 y en 1990. En 1984, en medio de una revolución y una

guerra, el líder sandinista prometió *gallo pinto y dignidad*²², y en 1990 las consignas fueron *Todo será mejor* y *¡Ganemos y adelante!* Sin embargo en la campaña de 2006 Ortega cambió de discurso y se basó en un mensaje de solidaridad y bondad cristiana.

En la campaña electoral de 2006 Ortega prometió “una política masiva de créditos y subsidios para todos los productores, la condonación de las deudas a todos los acreedores, la regulación de las agencias bancarias que canalizaran las remesas de los emigrantes, y petróleo venezolano para abastecer a Nicaragua” (Martí i Puig, 2008). Sin duda Ortega generó grandes expectativas entre sus bases, pero también prometió paz social a través de un discurso dónde no hubo referencia a la lucha de clases y sí a la paz y la concordia.

Después de 16 años de políticas neoliberales, la llegada de Ortega a la Presidencia creaba el interrogante de si el “nuevo” FSLN suponría un *cambio de políticas* y un giro social. Respecto *al énfasis de las políticas* no había duda que el enfoque de la nueva administración Ortega sobre políticas agrarias sería diferente al impulsado durante los años ochenta, pero no había certeza si mantendría la misma lógica de acumulación que se inició en 1990 o si avanzaría hacia políticas más *pro-pobres* y ambientalmente sostenibles. En cuanto al “giro social”, el FSLN, señaló que desplegaría políticas sociales focalizadas para las familias rurales más pobres (Spalding, 2009).

Otros dos factores a tener en cuenta eran, por un lado, el aumento de la demanda del mercado centroamericano de productos agrarios y, por otro, la posible ampliación de exportaciones al mercado venezolano que se concretó a través de la empresa nicaragüense-venezolana llamada ALBANISA. Venezuela llegó a ser el segundo socio comercial de Nicaragua después de los Estados Unidos —como se observa en el Cuadro N° 5²³—. En 2012 Venezuela compró el 48,9 por ciento del total de las exportaciones de carne, y también fue el segundo comprador de azúcar, además de absorber la mayor parte de la exportación de otros productos agrícolas²⁴.

A nivel productivo y comercial el regreso de Daniel Ortega representó la continuidad de la agenda neoliberal, con una economía más

22 *Gallo pinto* es una comida popular que consta de frijoles y arroz refritos, y es base de la dieta de la mayoría de nicaragüenses.

23 Véase Chamorro y Salina Maldonado (2011) y Nuevo Diario (2012).

24 En 2007 Nicaragua exportaba a Venezuela productos por apenas 6 millones de dólares, en 2011 llegó a 303 millones y en 2012, el valor más alto, con 438 millones de dólares, mientras que hacia Estados Unidos se exportaron mercancías con un valor de 768 millones.

privatizada y trasnacionalizada que la que existió antes de 1979; con algunas intenciones de corte desarrollista, sustentadas en alianzas entre el Estado, el capital extranjero y la formación de empresas de naturaleza público-privada, como ALBA de Nicaragua, S.A. (ALBANISA). En esta lógica cabe comprender las iniciativas empresariales impulsadas por el gobierno de crear una Refinería de Petróleo junto a la empresa venezolana PDVSA²⁵ y de construir una central hidroeléctrica (Tumarín) con el apoyo del gobierno de Brasil²⁶, así como el proyecto de construcción del Gran Canal Interoceánico. Las tres iniciativas de fuerte corte desarrollista no se lograron concretar.

A raíz de lo expuesto es posible señalar que el gobierno Ortega ha impulsado dos estrategias complementarias a sus intereses. Por una parte, la acumulación de capital sustentada en productos primarios y en actividades terciarias (comercio en gran escala, telecomunicaciones, banca) y por otra parte, el intento de crear un grupo empresarial propio, con una fuerte mediación del Estado.

Cuadro N° 5

Nicaragua: Exportaciones agropecuarias y alimentarias, 2007-2016 (en porcentajes)

Año	Venezuela	Centro América	Resto del mundo
2007	0,6	35,4	64,0
2008	2,4	32,1	65,5
2009	10,2	31,5	58,3
2010	17,2	23,0	59,8
2011	17,4	21,2	61,4
2012	21,6	19,7	58,7
2013	20,9	23,1	56,0
2014	18,8	23,1	58,1
2015	14,9	25,8	59,3
2016	7,2	31,8	61,0

Fuente: SIECA, y cálculos propios.

Pero más allá de la presencia de Venezuela en la economía nicaragüense el nuevo gobierno sandinista mantuvo la política macroeconómica y comercial, y la misma voluntad que las administraciones anteriores

25 Esta inversión se frustró debido a la profunda crisis económica y política de Venezuela después de la muerte de Chávez.

26 Esta inversión prevista, de 1100 millones de dólares sobre la base de un préstamo brasilero, se frustró por la crisis política y económica del gobierno de Dilma Rousseff.

de captar inversiones extranjeras en condiciones favorables a través de subsidios y exención de impuestos. Para justificar el mantenimiento de esta política económica Daniel Ortega expuso en la Asamblea Nacional (a la hora de defender los presupuestos de 2008) que tenía “un corazón de izquierda justiciero, y una cabeza de derecha responsable”²⁷.

El gobierno de Ortega, ha mantenido y ampliado la cooperación con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM, el BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y ha incrementado la presencia de la inversión extranjera directa en varios rubros, fundamentalmente en la producción primaria (azúcar, carne, leche, forestales, minería, energía, telecomunicaciones), en alianza con las élites empresariales tradicionales del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), a las que se han sumado a los grupos económicos de capital extranjero y otros cercanos al FSLN²⁸.

Pero más allá de las políticas de crecimiento, es necesario señalar que el gobierno de Ortega también ha apoyado la mejora de las condiciones en las zonas rurales a través de políticas sociales focalizadas con la implementación y el impulso de un abanico de medidas para lucha contra la pobreza. Estas políticas se han implementado en el territorio a través de plataformas para-estatales y partidarias llamadas Consejos del Poder Ciudadano (CPC) (que posteriormente se rebautizaron como Gabinetes de Familia, GF), coordinados por Rosario Murillo, Primera Dama desde 2007 y Vicepresidenta después de las elecciones del 6 de noviembre de 2016.

Los CPC/GF son organizaciones articuladas jerárquicamente que se extienden en cada uno de los niveles administrativos del país con el fin de mantener una presencia permanente en los municipios, comunidades y barrios²⁹. La implantación de los CPC/GF en el territorio ha hecho que el acceso a los recursos sea fácil para los beneficiarios, aunque también han impuesto un notable control de los beneficiarios, a la par que ha disminuido la interlocución con las organizaciones campesinas tradicionales.

De las políticas elaboradas, las que han tenido mayor impacto han sido las relacionadas con la educación obligatoria, aunque también han destacado los programas de Usura Cero, Hambre Cero y Vi-

27 Extraído de *Envío*, noviembre 2007, <<http://www.envio.org.ni/articulo/3674>>.

28 El apoyo del Banco Mundial y el BCIE, y la cooperación internacional bilateral, como la de Japón, ha contribuido a la ampliación de la red de caminos y de energía eléctrica, incluyendo zonas rurales.

29 Para mayor información de los CPC véase los trabajos de Stuart Armendariz (2009). Sobre la influencia de los CPC en el voto, véase González-Ocantos et al. (2012).

vienda Digna³⁰. De estos programas Hambre Cero (que técnicamente se denomina Bono Productivo Alimentario y que se ha implementado desde 2007) ha sido el más relevante para el campo³¹. Hambre Cero ha supuesto la entrega a familias pobres y con un limitado acceso a la tierra de animales domésticos para que puedan diversificar su producción, basada principalmente en granos básicos³². Se han entregado vacas preñadas, cerdos, gallinas, para que desde una lógica de producción de patio se pueda mejorar la alimentación, y vender los excedentes en los mercados locales. Entre 2007 y 2014 se ha entregado este bono a alrededor de 120.000 hogares, fundamentalmente encabezados por mujeres, con un valor medio por bono de 562 dólares³³.

En el Cuadro N° 6 puede verse un panorama de la evolución de la pobreza rural entre 1993 y 2015; los valores de los años noventa y comienzos de los 2000 colocan como pobres a más del 70 por ciento de los habitantes rurales (World Bank, 2008: 308), cifra que bajó hasta el 59 por ciento en 2015, a pesar de que en términos absolutos el número de pobres actuales es muy similar al observado en años anteriores, lo cual muestra los límites de este proceso de mejoramiento rural. El Cuadro N° 6 también muestra otros cambios sociodemográficos importantes. Se observa un fuerte incremento de la tasa bruta de participación que mide la relación entre la población en edad activa y el total de la población, y con ello se observa que entre 1993 y 2015 la relación entre personas activas y no activas ha incrementado a favor de las primeras, lo cual abre posibilidades de disminución de la pobreza³⁴. Sin embargo, buena parte de los ocupados están subempleados y ganan bajos ingresos.

30 Véase el informe del FIDEG sobre Encuesta de Hogares para medir la Pobreza en Nicaragua, <<http://www.fideg.org/investigaciones-y-publicaciones/116-2014-11-12-20-32-46>>.

31 En un inicio el director del programa fue Orlando Núñez, sociólogo y director de la ONG CIPRES, afín al FSLN. Posteriormente fue destituido y pasó a ser asesor presidencial en temas de políticas sociales.

32 A partir de 2017, como parte de las consecuencias para el gasto gubernamental de la reducción de la cooperación de Venezuela, el programa Hambre Cero, se ha reducido de manera importante, y asume más claramente el carácter de un préstamo que las familias receptoras deben pagar.

33 Estimaciones propias basadas en <<http://www.hacienda.gob.ni/documentos/pre-supuesto/informes>>.

34 En 1998 el tamaño medio de los hogares rurales era de 5,9 personas/hogar, con 2 ocupados por hogar, en 2015, el tamaño medio es de 4,7 personas por hogar, y los ocupados siguen siendo en promedio dos por hogar.

Cuadro N° 6
Nicaragua: Indicadores de la pobreza rural, 1993-2015

Año	Pobres rurales (en porcentajes)	Pobres rurales (en miles)	Tasa bruta de participación rural	Tamaño medio de hogares rurales
1993	76	1553	30,6	—
1998	69	1517	33,9	5,9
2001	68	1549	36,0	5,7
2010	63	1561	41,5	—
2011	62	1544	42,2	4,7
2012	61	1537	42,7	—
2013	62	1574	43,3	—
2015	59	1521	44,5	—

Fuentes: Porcentaje de Pobres 1993-2001 según Banco Mundial; 2010-2015, según FIDEG. Población y Ocupados rurales según CELADE; tamaño medio de los hogares rurales, según las encuestas DHS/ENDESA. La tasa bruta de participación mide la proporción de los ocupados rurales en relación al total de la población.

La pobreza y desnutrición que aún perviven en el campo es hoy más compleja de tratar que antes de la Revolución de 1979 debido a dos cuestiones, relativamente recientes. La primera es por la alta variabilidad climática y por el progresivo deterioro de los recursos (suelos y agua) que sostienen la agricultura debido a la destrucción permanente de áreas de bosques a raíz de la ampliación de la superficie de pastos que ocupan casi el 80 por ciento de la superficie trabajada³⁵. Y la segunda es por el agotamiento en Nicaragua de la frontera agrícola, que siempre supuso una válvula de escape.

A resultas de lo expuesto es posible afirmar que en Nicaragua se ha profundizado el desarrollo capitalista agroexportador (basado sobre todo en la producción de azúcar, palma africana, tabaco, carne, café), si bien no se ha fomentado el mejoramiento de la productividad en rubros claves como granos básicos, café y la ganadería vacuna, que reúne al grueso de los agricultores, particularmente los pequeños y medianos productores³⁶. Nicaragua tiene una relativamente mejor distribución de la tierra que los otros países de la región, y cuenta con una menor presión sobre la tierra, de modo que elevar la productividad del estrato de pequeños productores, en los rubros tradicionales y

35 Según INETER (2015) y Censo Agropecuario 2011.

36 Los rendimientos de cultivos como maíz, frijol, café, o de la relación de cabezas de ganado por hectárea son en Nicaragua inferiores a los de los países vecinos (Baumeister, 2015: 122).

en otros, podría mejorar los ingresos y ampliar la demanda de mano de obra local.

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

Durante la revolución sandinista el FSLN transformó la realidad del campo de Nicaragua a través de una reforma agraria que abarcó cerca del 30 por ciento de la superficie en fincas, que impulsó grandes inversiones públicas, generalizó el acceso al crédito público, organizó el trabajo agrario y controló el comercio. Tres décadas después, con la vuelta del FSLN al poder en 2007, la lógica de desarrollo agrario es muy diferente a la que impulsó en los años ochenta y se parece más a las políticas neoliberales implementadas a partir de 1990, pero con la novedad de estar acompañadas de algunas políticas sociales ampliadas. Desde la década de los noventa hasta el presente se ha mantenido la apertura comercial, la atracción de inversión extranjera directa y el casi monopolio del crédito y de la comercialización en manos de grandes empresas nacionales e internacionales.

Las políticas neoliberales impulsadas desde 1990 transformaron los derechos de propiedad sobre la tierra, liberalizaron y abrieron la economía al mercado internacional, y redujeron el volumen, el presupuesto y la “capacidad infraestructural” del Estado (Grugel y Riggirozzi, 2012), y la vuelta de Ortega a la Presidencia no supuso un cambio sustancial, ya que se optó por consolidar y apoyar las unidades productivas medianas y grandes abriéndolas a nuevos mercados (sobre todo el venezolano), a la par que se impulsaron políticas sociales focalizadas para luchar contra la pobreza y sostener las economías campesinas más débiles.

Sin duda, la etapa que se abrió en 2007 generó notables expectativas, pero era difícil pensar que con la vuelta del FSLN el Estado nicaragüense pudiera llevar a cabo políticas semejantes a las de la década revolucionaria³⁷. En el siglo XXI el capital nacional y transnacional tiene mucho más poder que en 1979, cuándo el FSLN derrotó la dictadura de Somoza. La pregunta, sin embargo, es la de ¿Era inevitable mantener un modelo de desarrollo neoliberal? La respuesta no es fácil, ya que si bien actualmente el Estado tiene menos herramientas que antes para impulsar modelos de desarrollo alternativos, también es cierto que el Estado siempre ha sido un instrumento para acumular poder, capital y para premiar élites políticas que se convierten en económicas —y viceversa—.

37 El texto de Godek (2015) muestra las dificultades alrededor del concepto de soberanía alimentaria y de la poca voluntad de los poderes del Estado nicaragüense a la hora de llevarlo a cabo.

El poder político es determinante en un país como Nicaragua donde el patrón principal de acumulación se realiza a través de los productos primarios muy vinculados al acceso a la tierra y a una mano de obra poco especializada³⁸. Pero, más allá de las constricciones contextuales, también cabe añadir cuatro elementos de naturaleza política que pueden dar alguna luz sobre la continuidad de las políticas neoliberales. El primero es la presencia de un sector empresarial tradicional con acuerdos fuertes con Daniel Ortega y su gobierno, que obtiene réditos de este modelo y que, por lo tanto, no tiene interés en cambiarlo (Spalding, 2009). El segundo es el deterioro de las organizaciones gremiales (que fueron creadas por el FSLN durante la revolución) y, con ello, la poca capacidad reivindicativa a nivel nacional de los campesinos y asalariados rurales para conseguir medidas más favorables para ellos. El tercero es la existencia de una amplia red de pequeños y medianos agricultores que tienen capacidad productiva y de presión en su entorno local y que generan un tejido gremial relativamente autónomo, expresado fundamentalmente en las cooperativas de comercialización de leche, café, y otros productos agrícolas, que actúan también en alianzas con organizaciones gremiales más amplias como la UNAG, FAGANIC y UPANIC. Y el cuarto es la masiva migración de los trabajadores más pobres del campo hacia Costa Rica que, junto con la presencia (aunque cada vez más exigua) de la frontera agraria³⁹, ha supuesto una válvula de escape al malestar de los perdedores del modelo de desarrollo agrario existente⁴⁰.

De lo expuesto es posible afirmar que las políticas del gobierno sandinista no se han orientado hacia una mayor autonomía campesina, si no que más bien han priorizado una lógica capitalista que se ha combinado con políticas sociales focalizadas de naturaleza asistencialista que, muchas veces, han adquirido formas clientelares. A raíz de ello en Nicaragua ha permanecido un desarrollo capitalista con pretensiones desarrollistas, más que un modelo que podría denominarse de manera genérica “campesinista”, y esto ha supuesto también confrontar a grupos descontentos y establecer alianzas con sectores económicos tradicionales, a la par que ha creado un grupo de poder políticamente afín.

38 También es preciso señalar que en las últimas décadas una parte del ingreso nacional equivalente al 10 por ciento del PIB nacional es aportado por las remesas familiares provenientes del exterior.

39 Es preciso señalar que la frontera agrícola se está agotando, lo cual genera conflictos crecientes entre comunidades indígenas y colonos de distinto tipo. Véase: <<http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/369744-crece-conflicto-miskitos-colonos/>>.

40 Observable en el avance de colonos campesinos sobre tierras de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica.

En esta lógica se puede observar un proceso de re-configuración de clase y de surgimiento de nuevas relaciones de clase en un contexto donde Daniel Ortega y el FSLN —a partir de su grupo económico y su control de las instituciones— son los actores clave. Esto ha sido así por la marcada continuidad en el estilo de desarrollo agrícola en el período que se abre en 2007 con la dinámica agraria abierta a inicios de los años noventa, caracterizados por una presencia dominante de las empresas procesadoras y exportadoras. En esta línea la administración Ortega ha buscado, por un lado, consolidar un grupo económico cercano a través de consorcios de naturaleza público-privada, y por otro lado, ha apoyado un sector de pequeños productores de escasos recursos, fundamentalmente formado por mujeres rurales pobres, con la entrega a pequeña escala de animales (vacas, cerdos, aves) para diversificar el autoconsumo de alimentos, excesivamente conformado por granos básicos y para vincular este sector con los mercados locales, y también a sectores de productores más comerciales de tipo mediano organizados en cooperativas de comercialización en rubros como la lechería y el café. El modelo expuesto, sin embargo, es difícilmente sostenible ya que en un futuro inmediato se prevé el agotamiento de la frontera agrícola y también el fin de la cooperación venezolana. Estos dos elementos, junto con las políticas confrontativas de la administración Trump, plantean interrogantes sobre el sostenimiento de un patrón agrario extensivo con poca capacidad para mejorar la productividad y los ingresos en las zonas rurales, particularmente para los estratos pobres, que siguen siendo mayoritarios.

BIBLIOGRAFÍA

- Baumeister, E. 1998 *Estructura y reforma agraria en Nicaragua 1979-1989* (Managua: Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Universidad Libre de Ámsterdam).
- Baumeister, E. 2015 *Evolución del gasto público agropecuario en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua* (San Salvador: Cuaderno de Trabajo 01).
- Baumeister, E. y Fernández, E. 2005 *Análisis de la tenencia de la tierra en Nicaragua* (Managua: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal).
- Baumeister, E. y Havens, E. 1982 “Recruitment and retention of occasional workers in the Export Sector of Agriculture in Nicaragua”, documento de trabajo (Wisconsin: Land Tenure Center y Rural Sociology Department).
- Baumeister, E.; Fernández, E. y Acuña, G. 2008 *Estudio de las migraciones regionales de los nicaragüenses* (Guatemala: Estudios en Ciencias Sociales).

- Biondi-Morra, B. 1990 *Revolución y política alimentaria. Un análisis crítico de Nicaragua*. (México DF: Siglo XXI / CRIES).
- Cardenal, G. 1987 “La Reforma Agraria Sandinista”, ponencia presentada en el III Congreso Nicaragüense de Ciencias Sociales (Managua).
- Chamorro, C. F. y Salina Maldonado, C. 2011 “Las cuentas secretas de Albanisa” en *Confidencial*, 05/03. Disponible en <<http://www.confidencial.com.ni/>>.
- CIERA 1981 “Mano de obra del café y algodón”, documento interno de trabajo (Managua: CIERA).
- Close, D. 1988 *The Chamorro Years* (Boulder: Lynne Rienner).
- Dore, E. 1990 “The Great Grain Dilema. Peasants and State Policy in Revolutionary Nicaragua” en *The Journal of Peasant Studies*, 17 (2).
- Equipo Envío 1992 “El rompecabezas de la propiedad” en *Envío*. Disponible en <<http://www.envio.org.ni/articulo/757>> acceso 31/12/2015.
- FIDEG 2013 *Estudio sobre Pobreza en Nicaragua* (Managua: FIDEG). Disponible en <<http://www.fideg.org/investigaciones-y-publicaciones/116-2014-11-12-20-32-46>>.
- Godek, W. 2015 “Challenges for food sovereignty policy making: the case of Nicaragua’s Law 693” en *Third World Quarterly*, 36 (3).
- González-Ocantos, E.; Kiewiet de Jonge, C.; Meléndez, C.; Osorio, J.; y Nickerson, D. W. 2012 “Vote buying and social desirability bias: experimental evidence from Nicaragua” en *American Journal of Political Science*, 56 (1).
- Grugel, J. y Rigorizzi, P. 2012 “Post-neoliberalism in Latin America: rebuilding and reclaiming the state after crisis” en *Development and Change*, 43 (1).
- Jonakin, J. 1997 “Agrarian Policy” en Walker, T. W. (comp.) *Nicaragua without Illusions: Regime Transition and Structural Adjustment in the 1900s* (Wilmington: SR Books).
- Kaimowitz, D. 1986 “Nicaraguan Debates on Agrarian Structure and their implications for agricultural policy and the rural poor” en *The Journal of Peasant Studies*, 14 (1).
- Kleiterp, N. 1989 “El modelo de acumulación: un problema de balances. El caso de Nicaragua” en Ruben, R. y De Groot, J. P. (comps.) *El debate sobre la reforma agraria en Nicaragua* (Managua: INIES).
- Martí i Puig, S. 1997 “Cuando la revolución llegó al campo. La política agraria sandinista, su debate y su impacto en las zonas

- rurales del interior” en *Anuario de Estudios Centroamericanos* (San José: UCR) 23 (1-2).
- Martí i Puig, S. 2001 “The Origins of the Peasant Contra Rebellion in Nicaragua, 1979-1987”, Working Paper N° 54 (Londres: University of London, Institute of Latin American Studies).
- Martí i Puig, S. 2008 “El regreso del FSLN al poder: ¿Es posible hablar realineamiento electoral en Nicaragua?” en *Revista Política y Gobierno*, 15 (1).
- Martí i Puig, S. 2013a “Nicaragua: la consolidación de un régimen híbrido” en *Revista de Ciencia Política* (Santiago de Chile: UPC) 33 (1), pp. 269-286.
- Martí i Puig, S. 2013b *Nicaragua (1979-1990): La revolución enredada* (s/d). Disponible en <https://www.academia.edu/1621806/NICARAGUA_1979-1990._LA_REVOLUCIÓN_ENREDADA>.
- MIDINRA 1987 *Sobre la gestión del Estado para la atención del campesinado y al movimiento cooperativo* (Managua: CIERA).
- Nicaragua 1963 *Censo Nacional de Población 1963*.
- Nicaragua 1971 *Censo Nacional de Población 1971*.
- Nicaragua 1995 *Censo Nacional de Población 1995*.
- Nicaragua 2005 *Censo de Población 2005*.
- Nuevo Diario 2012 “Apoyo Alba suma U\$ 2.250 millones” en *Nuevo Diario*, disponible en <<http://www.elnuevodiario.com.ni/economia/238464>>.
- Núñez, O. 1980 *El Somocismo: desarrollo y contradicciones del modelo capitalista agroexportador en Nicaragua (1950-1975)* (La Habana: Centro de Estudios sobre América).
- Pérez, F. y Fréguin-Gresh, S. 2014 *Nicaragua en Políticas Públicas y Agriculturas Familiares en América Latina y el Caribe: Balance, desafíos y perspectivas* (Santiago de Chile: CEPAL).
- Serra, L. 1990 *El movimiento campesino y su participación en la Revolución Popular Sandinista* (Lovaine-la-Neuve: U. Lovaine-la-Neuve) tesis doctoral.
- Spalding, R. 2009 “Las políticas contra la pobreza en Nicaragua” en Martí i Puig, S. y Close, D. (coords.) *Nicaragua 1979-2009. ¿Qué queda de la revolución?* (Barcelona: Edicions Bellaterra).
- Spalding, R. 2014 “Social Movements in Central America” en Sánchez, D. y Martí i Puig, S. (eds.) *Handbook on Central American Governance* (Nueva York: Routledge).
- Spalding, R. 2016 “Los empresarios y el estado en la Nicaragua post-revolucionaria: el reordenamiento de las élites y la nueva estrategia de colaboración” en *Élites en las Américas: Diferentes*

- perspectivas, editado por Adriano Codato y Fran Espinoza (Madrid: Editorial Vervuent).
- Stuart Almendárez, R. (coord.) 2009 *Consejos del Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua* (Managua: CEAP). Disponible en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_consejos.pdf>.
- Utting, P. 1988 *The Peasant question and development policy in Nicaragua* (Ginebra: UNRISD).
- Vilas, C. M. 1984 *Perfiles de la revolución sandinista* (La Habana: Casa de las Américas).
- Wheelock, J. 1986 *Balance y perspectivas de la reforma agraria* (Managua: MIDINRA).
- World Bank 2008 *Nicaragua: Poverty Assessment. Main report. Vol. II* (S/d: World Bank). Disponible en <<http://documents.worldbank.org/curated/en/235491468297893170/Main-report;jsessionid=nvgUwx7+0NL05sZbDebt5AAB>>.

